

AMPARO

De garantías promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Luis Kelly en representación de la casa de J. Kelly y Compañía del comercio de Mazatlan, contra el cobro que por medio de la facultad económico-coactiva, les hace el Administrador de la Aduana marítima de ese puerto, como derechos causados por mercancías importadas á bordo del bergantín goleta «Douse» procedente de Liverpool.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El promotor fiscal dice: como este juicio de amparo es enteramente idéntico al que se ventila en ese mismo Juzgado por los Señores J. Quintana y Compañía, en el que tengo ya emitido mi parecer, creo de mi deber reproducirlo para obrar en consencuencia; dice así:—C. Juez de Distrito.—Los CC. J. de la Quintana y Compañía se han presentado ante V. solicitando amparo contra los procedimientos del C. Administrador de la Aduana marítima, que les exige en ejercicio de la facultad coactiva, el pago del treinta y tres por ciento de los derechos que enteraron á los sublevados de este puerto por las importaciones y en las fechas que se determinan en el escrito relativo. La petición se ha hecho por creerse violadas, con los procedimientos administrativos, las garantías que conceden los artículos 16 y la parte final del 89 de la Constitución general de la República.

El primero de dichos artículos, dice textualmente: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” Es así que en el presente caso se ha procedido con los Sres. J. de la Quintana y

Compañía, por la Administración de la Aduana marítima, con tal sujeción á las prescripciones del artículo antes citado; luego siendo como es el Administrador de la Aduana la autoridad competente, en virtud de la ley de 11 de Diciembre de 1871 que declaró vigentes las de 20 de Enero de 1837 y de 20 de Noviembre de 1838, para ejercer la facultad coactiva, es evidente que no se han violado las garantías cuyo amparo se invoca.

Respecto de la queja que se funda en la parte final del artículo 89, también de la Constitución, cree el que suscribe que será motivo para exigir la responsabilidad oficial al Administrador; pero nunca para intentar el juicio de amparo que se promueve.

Todas las razones, todos los fundamentos de los Sres. J. de la Quintana y Compañía, serán buenos para formalizarse en un juicio contencioso y presentándose como excepciones acaso admisibles en sus procedimientos, pero que absolutamente son extemporáneas en un juicio de amparo. Que los pagarés son nulos como arrancados por la fuerza; que los arreglos hechos con el presidente Juárez no tienen valor, aunque no son otra cosa que la ratificación de aquellos y un compromiso para pagar solo el treinta y tres por ciento de lo que importaron los derechos causados; todo esto no puede dilucidarse, ni mucho menos resolverse sino por un juicio contencioso declarativo, que dirima para siempre estas cuestiones.

Entre tanto, estando los pagarés á la orden de la Administración, terminando el arreglo con el gobierno para el pago del treinta y tres por ciento y vigente la ley que concede el ejercicio de la facultad coactiva, es evidente que no existe la violación de las garantías que impetran los Sres. J. de la Quintana y Compañía, y que no procede su recurso. Para mayor corroboración de lo expuesto, el fiscal se refiere punto por punto al informe rendido por el C. Administrador de la Aduana marítima, y por todo pa-

de que se resuelva: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. J. de la Quintana y Compañía, contra el cobro de ciento tres mil, seiscientos noventa y dos pesos setenta y seis centavos (\$103.692,76) que los exige aquel empleado, por medio de la facultad coactiva.

Así espero que ese Juzgado se sirva de terminarlo con relacion al presente asunto.

Mazatlán, Enero 13 de 1873.—*L. Gaona.*

Sentencia del O. Juez de Distrito

Mazatlán, Enero 21 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por D. Luis Kelly como representante de la casa de comercio de J. Kelly y C^{as}, contra la providencia que el C. Administrador de la Aduana marítima dictó para que se exija por medio de la facultad económico-coactiva á dicha casa, la cantidad de (\$ 50, 843. 96.) cincuenta mil ochocientos cuarenta y tres pesos, noventa y seis centavos por derechos de importacion que causaron los efectos descargados en este Puerto del Bergantin Goleta "*Douse*," alegando el quejoso, que con tal providencia se viola la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitucion general, porque en el caso presente no caben los procedimientos de aquella facultad, y por consiguiente, estima el Señor Kelly al Administrador, como autoridad incompetente para ordenar la ejecucion contra la espresada casa, y apoyándose para promover este juicio, en la fraccion 1^a artículo 1^o de la ley de 20 de Enero de 1869.

Visto tambien lo pedido sobre suspension de la providencia contra la que se pide amparo; lo resuelto sobre este punto; los documentos presentados por el repetido Señor Kelly al entablar su demanda; lo pedido por el C. fiscal, con todo lo mas que ver convino.

Considerando: que el quejoso no solicita amparo porque desconosca la accion del fisco para reclamar los derechos que cree se le

deben, sino porque no reconoce en el C. Administrador la autoridad competente para haber decretado la ejecucion contra la casa que representa, y ordenar el procedimiento de que se queja, á la vez que no siendo indisputable aquella, no cabe en la facultad económico-coactiva.

Considerando tambien: que la ley de 23 de Enero de 1837 en que funda el Administrador los procedimientos que motivaron este juicio, prohibe expresamente en su artículo 1^o á los empleados, ingerirse en la jurisdiccion contenciosa que corresponde á los Jueces, y declara en el 2^o por negocios contenciosos, aquellos en que sean forzosa las actuaciones judiciales, ó en los que se disfrute la paga por la variacion de tiempo y circunstancias que den motivo de dudas para la aplicacion de la ley, y por el 3^o prohíbe, que pueda tener lugar providencia alguna coactiva, cuando el derecho del fisco no sea claro é indudable.

Considerando igualmente: que al alegar el quejoso que para la dacion del pagaré que otorgó, que se pretende hacer efectivo, intervinieron fuerza y coaccion, ya propone una escepcion que en derecho es admisible, y por lo mismo para resolver sobre su validez y sobre si es ó no bastante para desvirtuar la accion del fisco, son indispensables actuaciones judiciales que no caben en los procedimientos propios de la facultad económico-coactiva. En consideracion tambien á que aunque dicho pagaré fué otorgado por la cantidad que hoy se exige, el Supremo Gobierno por equidad lo rebajó sin condicion alguna á una tercera parte de la mitad de su valor, y no obstante tal rebaja, se cobra íntegra la suma porque fué dado, cuyas alternativas importan una innovacion de dicho documento, y por consiguiente, el derecho del fisco que se dice tiene contra la casa de J. Kelly y C^{as} no es claro é indudable, á la vez que por haber sido innovado aquel, requiere un examen judicial y audiencia de las partes, para resolverse cual es la cantidad que verdaderamente de-

ba pagar la repetida casa, y por consiguiente, á mas de no caber conforme á la citada ley de 837 providencia alguna coactiva en este cobro, por haber dejado de ser claro é indudable el derecho del fisco desde que fué innovado el documento que pretende hacer efectivo, quedó sujeta á la jurisdiccion contenciosa la resolucian que debe recaer respecto á la innovacion que aquel sufrió, y para cuya resolucian son indispensables las actuaciones judiciales.

Considerando así mismo: que si bien la hacienda pública tiene un derecho indisputable para que se le paguen los de importacion que causen los efectos extranjeros que se descarguen en cualquier Puerto de los que por ley están habilitados para el comercio de altura, este derecho se hace dudoso en el caso presente, porque las circunstancias que intervinieron al otorgamiento del pagaré que se cobra, no son las que concurren en tiempos normales, supuesto que se alega en su contra fuerza y coaccion, se disputa su legalidad, se duda del verdadero valor que en el dia deba tener, y por último se hace valer por el que se considera deudor, que no habiendo sido él el consignatorio ni importador, ninguna responsabilidad debe pesar sobre él, cuyas cuestiones todas exigen resoluciones con previo conocimiento de causa.

Considerando por último: que teniendo como tiene, siempre espedita su accion la hacienda pública para exigir la indemnizacion de lo que crea se le debe, ya persiguiendo á los causantes de ella, á los efectos que la causen ó á cualesquiera otros bienes que sean conocidos de los que se estimen deudores, ningun perjuicio debe ocasionarse en ocurrir á los Tribunales á ejercitarla, para que estos, en vista de los alegatos y previas las actuaciones que la cuestion demande, resuelvan conforme á derecho. Por estas razones, y teniendo presente la ejecutoria dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, constante á los folios 195 y 196 de la 2ª parte del Semanario

Judicial, y con el apoyo de los artículos 16 y 101 de la Constitucion general y de la fraccion 1ª art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo con las siguientes proposiciones: 1ª. La Justicia de la Union ampara y protege á D. Luis Kelly representante de la casa J. Kelly y Cª, contra la providencia dictada y mandada ejecutar por el Ciudadano Administrador de la Aduana Marítima, en uso de la facultad económico-coactiva, para exigir á la expresada casa la cantidad de (\$0.843\$ 96 centavos) cincuenta mil ochocientos cuarenta y tres pesos noventa y seis centavos, por derechos de importacion que causaron los efectos que en este Puerto descargó el Bergantin Goleta «Douse.» 2ª. Súquense dos copias de esta sentencia, una para publicarse en el Periódico Oficial del Estado, y la otra para remitirse al Semanario Judicial 3ª. Previo notificacion de ella, pasen los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para su revision. El Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó con los de asistencia. —*Pedro S. Bermúdez.*—A.—*Antonio C. Iturrias.*—A.—*Aurelio Padilla.*

Es copia. Mazatlan, Enero 24 de 1873.
—*Pedro S. Bermúdez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 8 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 2 de Enero del corriente año promovió en el Puerto de Matamoros ante el Juez de Distrito del Estado de Sinaloa, D. Luis D. Kelly, en representacion de la casa de J. Kelly y Compañia del comercio de ese Puerto, contra el cobro que por disposicion del poder Ejecutivo de la Union, y por medio de la facultad económico-coactiva, hace á sus representados el Administrador de la Aduana marítima del referido Puerto, de la cantidad (\$ 50.843 98 centavos) cincuenta mil ochocientos cuarenta y tres pesos, noventa y ocho centa-

vos, valor de los derechos de importacion de diversas mercancías que trajo á su bordo el Bergantin Goleta "Douse", y que procedente de Liverpool fondeó en aquel Puerto en 7 de Febrero de 1872; con cuyo cobro y procedimiento, alega el promovente que se han violado las garantías que concede la parte 1ª del artículo 16 de la Constitucion federal; que los derechos expresados fueron pagados por la fuerza á los que se sublevaron en dicho Puerto, contra el Gobierno de la Nacion en 17 de Noviembre de 1871, y en virtud de las razones que aducen, sostienen, que ese pago unido con el cobro que se les hace ahora, ha venido á constituir una cuestion de la competencia de los Tribunales, sin poderse ejecutar previamente la facultad económico-coactiva, como se está verificando. Vistas las constancias de autos, y Considerando:

Que los Sres. J. Kelly y Compañía de Mazatlan, son los importadores, los consignatarios, ó por lo menos y segun su propio acerto, los compradores de una parte de las mercancías extrangeras que descargó en aquel Puerto el Bergantin Goleta "Douse", su capitan Joh Grace, en Febrero de 1872. Que por hallarse aquel Puerto á la sazón, en poder de los revoltosos, y cerrado al comercio de altura, escala y cabotaje, las expresadas mercancías no habian sido examinadas conforme á las leyes fiscales de la República. Que por el arancel vigente de Aduanas marítimas y fronterizas, todas las mercancías extrangeras que se introduzcan á la República, tienen que manifestarse y pagar las cuotas aduanales que él establece, á cuyo pago estan siempre afectas las mismas mercancías, cualquiera que sea su proceder, ó de lo contrario, se reputan contrabando ó incurrir en las penas relativas. Que en esa disyuntiva de si el Gobierno de la Union, en atencion á las circunstancias, no ha creído deber tratar como contrabandistas á los Sres. J. Kelly y Compañía, aun cuando la importacion de esos efectos se hizo estando el Puerto clau-

surado, al considerarlos como importadores ó consignatarios leales, ó como compradores de mercancías legalmente importadas, no puede prescindir de cobrarles los derechos que esas mercancías causaron y que no han pagado. Que en consecuencia, es legítimo, claro ó incuestionable, el derecho con que el administrador de la Aduana exige el pago de esas cuotas aduanales á J. Kelly y Compañía, aun admitiendo que el pagaré de plazo cumplido que firmó la casa por el monto de ellas, tengo todos los defectos que se le objetan; y aun cuando tal pagaré no existiera. Que esa legitimidad y claridad en el derecho con que la autoridad exige ese pago, es todo lo que se requiere para el ejercicio de la facultad económico-coactiva, segun el artículo 39 de la ley de 20 de Enero de 1837. Que las excepciones opuestas contra el cobro, y que consisten en la violencia ejercida por los revoltosos para que se efectuara la importacion de las mercancías, en el pago que los mismos exigieron de los derechos causados y en el valor que deba darse á la rebaja ofrecida por el Gobierno, lejos de poner en duda, suponen y confirman el derecho del Gobierno, y por lo mismo, aun cuando ellas sean de estimarse en el juicio respectivo, no pueden estorbar el ejercicio de la facultad económico-coactiva, hasta dejar asegurada la Hacienda pública, segun el artículo 18 de la ley antes citada.

Que en tal virtud, el Administrador de la aduana Marítima de Mazatlan, está en su pleno derecho para ejercer la facultad económico-coactiva contra J. Kelly y compañía, sin que por esto se entienda violado el artículo 16 de la Constitucion federal.—Por las razones y fundamentos expuestos, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1860, se resuelve lo siguiente:

Primero. Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito del Estado de Sinaloa en el Puerto de Mazatlan, á 21 de Enero del corriente año, en la cual declara: que la Justicia de la Union ampara y pro-

tege á D. Luis Kelly, representante de la casa J. Kelly y compañía, contra la providencia dictada y mandada ejecutar por el C. Administrador de la aduana Marítima, en uso de la facultad económico-coactiva, para exigir á la expresada casa la cantidad de (\$ 50. 843, 98.) cincuenta mil ochocientos cuarenta y tres pesos noventa y ocho centavos, por derechos de importacion que causaron los efectos que en ese Puerto descargó el Bergantin Goleta "Douse."

Segundo.: La Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres J. Kelly y Compañía, contra el cobro que por disposición del Poder Ejecutivo de la Union conforme á las Leyes y por medio de la facultad económico-coactiva les hace el Administrador de la Aduana Marítima de Mazatlan, de la cantidad de (\$50. 843, 98 centavos) cincuentamil ochocientos cuarenta y tres pesos noventa y ocho centavos, por derechos de importacion de diversas mercancías que trajo á su bordo el Bergantin Goleta «Douse».—Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó en revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los Ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazón.*—*Juan J. de la Garza.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Gmezman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 28 de 1873. *Lro. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado primero de Distrito de México por el C. Nestor Martinez, contra su consignacion al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El promotor dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por el C. Nestor Martinez, quejándose de que el día 7 de Mayo fué tomado de leva y dado de alta en el servicio militar, violándose en su persona la garantía que le concede el artículo 59 de la Constitucion. Recibido el juicio á prueba, fué remitida por la comandancia militar la filiacion del quejoso, y como por esta aparece que en la fecha citada fué destinado por la expresada comandancia militar á servir en la brigada de artillería, estando vigente ese día la Constitucion, y no pudiendo ser obligado ningun ciudadano á prestar sus servicios contra su voluntad; es evidente que existe la violacion de la garantía reclamada, por lo cual puede el Juzgado declarar, que la Justicia Federal ampara y protege al C. Nestor Martinez.—México, Marzo 22 de 1873.—*Herrera Campos.*

Es copia que certifico.—*E. de A. Osorno.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México Abril 9 de 1873. Visto el recurso de amparo promovido por Nestor Martinez, quejándose de que contra su voluntad, y tomado de leva, se le destinó al servicio militar, violando en su persona la garantía individual consignada en el art. 59 Constitucional; y como de la filiacion remitida por el C. Coronel de la primera Brigada de Artillería, resulta que al quejoso se le dió de alta en este cuerpo el día 8 de Mayo último, en cuya fecha no estaba investido el Poder Ejecutivo de facultades extraordina-